

Latam 360° Perú. La minería como fuente de riquezas y conflictos

PhD. Carlos H. Brandt S.

05 de enero 2022

En los últimos 12 meses el cobre ha aumentado su cotización internacional en 44%, por lo que estimaciones indican que se estaría ante un ciclo de precios altos. A su vez, este representa el 50% de las exportaciones mineras de Perú y constituye el sector que aportaría el 75% de las inversiones proyectadas. En cuanto al tema fiscal, hasta septiembre de 2021, las arcas del Estado han visto crecer 209% la recaudación por Impuesto General a la Renta.

El anterior ciclo de cotizaciones elevadas, se remonta a 2011 y el Estado tuvo una participación del 17% de los ingresos generados por tal subida. Para entonces, se consideró que las autoridades de turno pudieron haber hecho un esfuerzo para beneficiarse de la actividad extractiva, ajustando los cánones establecidos a las empresas que explotaban el mineral de forma de obtener mayores ingresos.

Con esta experiencia, los colaboradores del presidente Pedro Castillo - principalmente Pedro Francke- le han insistido en introducir ante el Congreso, un proyecto de ley de reforma fiscal, que permita captar un mayor porcentaje de los recursos que generan las empresas del ramo, al explotar un recurso no renovable cuya propiedad le pertenece a la República.

A su vez, esta postura se corresponde con su discurso de campaña, en el que afirmaba que “no debía haber más pobres en un país rico”, en clara alusión a las inequidades y carencias de los pueblos de las regiones mineras, donde su candidatura fue ampliamente votada. Esta situación le exige una especial atención a tales zonas, las cuales tienen altas expectativas de que por primera vez, un Gobierno como el de Castillo, reivindique y satisfaga las demandas que durante décadas no han sido resueltas.

Ahora bien, además de generar riqueza, la actividad minera en el país es un foco constante de conflictos con las poblaciones aledañas. Según el Observatorio de Conflictos Mineros, en la actualidad están activos 42 disputas medioambientales, muchas de ellas, previas al Gobierno de Castillo, el cual ha implementado un enfoque diferente a sus antecesores, **no criminalizando la protesta** y optando por la **vía del diálogo** para solucionarlas.

Esta tensión social que se vive en el corredor minero sur, abarca los desarrollos de Antapaccay, Hundbay y las Bambas. En total, serían 10 los proyectos que en meses recientes han visto afectadas sus actividades, como consecuencia de los bloqueos de las carreteras, los cuales impiden el libre paso de los insumos, y el traslado del cobre hacia los puertos para su exportación.

Según sostienen los campesinos, la actividad extractiva del cobre contamina las aguas y genera polvo que aniquila los cultivos y enferma los animales. Además, las comunidades carecen de infraestructura y fuentes de trabajo, situación que perdura en el tiempo como un recordatorio de la falta de voluntad de los diferentes gobiernos para gestionar y solventar estas carencias.

Los bloqueos han afectado el funcionamiento de la mina Constancia y Antapaccay, propiedad de Hudbay Minerals INC y Glencore, respectivamente. También Antamina de BHP, Glencore, Teck Resources y Mitsubichi. De estos desarrollos, uno de los más importantes es Las Bambas, donde se extrae el 2% del cobre del mundo, siendo una de las minas más grandes del país. El consorcio chino que lo explota es MMG LTD y debió detener operaciones en diciembre de 2021 ante la negativa de los manifestantes de levantar los bloqueos, perdiendo diariamente US\$ 9.5 millones. Sin embargo, con la intervención del Gobierno y su estrategia del uso del diálogo, desde finales de 2021, la empresa alcanzó un acuerdo con los manifestantes y dio inició a la reanudación de las actividades.

Ahora bien, es evidente que el estado central y local se ha beneficiado ampliamente de los recursos que ingresan al país por concepto de exportación del cobre; sin embargo, ha sido ineficiente e indolente en redistribuir dicha riqueza en beneficio de las comunidades donde se encuentran asentadas las empresas. Según ha indicado MMG LTD, desde el año 2016, le han entregado al fisco US\$ 1.210 millones; lo que evidencia la disponibilidad de recursos económicos.

En lo sucesivo, el Ejecutivo de Pedro Castillo deberá enfrentar los bloqueos que todavía persisten, en una medida para restablecer el orden y la confianza de las empresas y los inversionistas, afectados por la incertidumbre causada por las posiciones contradictorias de su gobierno y la carencia de un entramado institucional que permita canalizar y atender las demandas de la población, de tal manera de revertir las estimaciones de los especialistas para 2022, para quienes los bloqueos traerán como consecuencia una reducción de la inversión en minería por el orden del 27%.